CNE OF. ORD. N° 767/2025

- ANT.:**
- (1) Resolución Exenta N° 75, de 29 de febrero de 2024 de la Comisión Nacional de Energía, que declara en construcción el proyecto PMGD FV La Cosecha.
 - (2) Carta S/N de 5 de mayo de 2025, de Sociedad Energías Renovables El Álamo SpA, que solicita pronunciamiento respecto del régimen de precio aplicable al proyecto PMGD FV La Cosecha.
 - (3) Oficio Ord. N° 487, de 6 de junio de 2025 de la Comisión Nacional de Energía, que da respuesta a Carta del ANT. (2).
 - (4) Carta S/N de 10 de junio de 2025, de Sociedad Energías Renovables El Álamo SpA, que se refiere al Oficio del ANT. (3) y solicita pronunciamiento de la Comisión en los términos que indica.

MAT.: Se pronuncia respecto de Carta del ANT. (4) y complementa Oficio del ANT. (3).

SANTIAGO, 29 de agosto de 2025

A: SR. MAURICIO RIVEROS HABIB
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD ENERGÍAS RENOVABLES EL ÁLAMO SpA

DE: MARCO MANCILLA AYANCÁN
SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Mediante la Resolución Exenta del ANT. (1), la Comisión Nacional de Energía (la "Comisión"), declaró en construcción el proyecto PMGD FV La Cosecha (el "Proyecto"), de propiedad de Sociedad Energías Renovables El Álamo SpA (el "Titular"), en virtud de lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley General de Servicios Eléctricos (la "LGSE") y lo dispuesto en los artículos 68° y 69° del Decreto Supremo N° 88, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento para Medios de Generación de Pequeña Escala (el "Reglamento de MGPE").

Luego, a través de la carta individualizada en el ANT. (2), su representada solicitó a esta Comisión emitir pronunciamiento respecto del régimen de precio aplicable al Proyecto, señalando como fundamento para acoger el Proyecto al régimen de precio estabilizado, que este cumpliría con lo indicado en el Oficio Ordinario CNE N° 041, de 13 de enero de 2022 ("Ord. CNE N° 041/2022"), que indica consideraciones extraordinarias para el proceso de Declaración en Construcción de proyectos de generación y deja sin efecto Oficio CNE N° 828 de 2021.

Al efecto, por Oficio del ANT. (3), esta Comisión dio respuesta a lo solicitado por su representada en la carta del ANT. (2), indicándose en dicho oficio que, a juicio de esta Comisión, el Proyecto no cumpliría con lo establecido en el artículo 2° transitorio literal b) del Reglamento de MGPE y el Ord. CNE N° 041/2022 para efectos de optar al régimen de precio estabilizado por precio de nudo de corto plazo.

Posteriormente, mediante la carta individualizada en el ANT. (4), el Titular insiste en que el Proyecto sí cumpliría con la normativa para ser acogido al régimen de precio estabilizado por precio de nudo de corto plazo, y solicita a la Comisión "emitir una observación, aclaración o modificación, lo que se estime conveniente, en orden de aclarar para entendimiento de terceros que la declaración en construcción, a pesar de haber sido emitida con fecha 29 de febrero de 2024 por medio de la RE75, esta sí cumple con los requisitos del oficio de la misma CNE ORD. N° 041/2022 sobre consideraciones extraordinarias para el proceso de Declaración en Construcción, y así sí debiese ser acogido para el régimen de precio estabilizado por precio de nudo de corto plazo".

En cuanto al fundamento particular de la solicitud contenida en la carta del ANT. (4), su representada sostiene que el Informe Favorable para la Construcción ("IFC"), originalmente solicitado habría sido rechazado de manera ilegal por Resolución Exenta N° 267, de 13 de junio 2022 por el Director Regional Subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del Maule, ante lo cual, presentó recurso de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, acorde al artículo 59° de la Ley N° 19.880, el último de los cuales fue acogido por el Director Nacional Servicio Agrícola y Ganadero, mediante Resolución Exenta N° 5477, de 29 de agosto 2023, la cual ordenó realizar los actos administrativos que en derecho correspondan con el objeto de informar dicho IFC como favorable, luego de lo cual el SAG Regional emitió el IFC favorable mediante Resolución Exenta N° 818 de 5 de septiembre de 2023, y a su turno la SEREMI MINVU de la Región de Ñuble mediante Oficio Ordinario N° 292, de 10 de noviembre de 2023.

En virtud de lo anterior, sostiene el Titular en su carta del ANT. (4) que: "*siendo la corrección de un acto administrativo viciado como se estableció el rechazo del IFC la corrección del mismo implica un nuevo acto administrativo, pero que en plazo no se hace oponible al recurrente, es decir, los plazos se dan por cumplidos en la fecha de la presentación original y no en la fecha de la corrección del acto administrativo ilegal o viciado. Así, el ítem pendiente a consulta de la CNE respecto al IFC del proyecto la Cosecha se debe considerar por contestado y aprobado con fecha dentro de plazo del criterio de flexibilización Ord. 041 y no de la corrección del hecho por autoridad*", solicitando un pronunciamiento al respecto por parte de esta Comisión.

Asentado lo anterior, esta Comisión viene en dar respuesta a lo solicitado por carta del ANT. (4), en base a las siguientes consideraciones:

I. Acerca de las consideraciones extraordinarias o criterios de flexibilidad aplicados por la Comisión al proceso de declaración en construcción, por un periodo de tiempo acotado.

Al respecto, corresponde tener en consideración que, en un contexto excepcional, determinado por la emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19 y la consecuente declaración de estado de catástrofe a nivel nacional, situación que afectó gravemente el funcionamiento regular de los órganos públicos y privados, generando retrasos generalizados en la tramitación de permisos, la Comisión adoptó consideraciones extraordinarias para el proceso de declaración en construcción, mediante distintos actos administrativos¹, a fines de flexibilizar la evaluación de las solicitudes de declaración en construcción de instalaciones de generación y transmisión.

En particular, mediante el Oficio Ordinario N° 828, de 18 de noviembre de 2021, posteriormente dejado sin efecto por el Oficio Ordinario N° 041, de 13 de enero de 2022, ambos de la Comisión, se admitió, de manera transitoria, la posibilidad de declarar en construcción ciertos proyectos que aún no contaban con la totalidad de los antecedentes exigidos por el artículo 19° del Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, entre ellos el IFC.

Al respecto, el Ord. CNE N° 041/2022, de 13 de enero de 2022, respecto del criterio de flexibilidad asociado a la entrega de IFC, indicó que:

*"Informes Favorables para la Construcción ("IFC"): se podrá presentar el ingreso de la solicitud de obtención del IFC al correspondiente servicio (SEREMI MINVU o SAG) hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, se debe haber iniciado la tramitación del respectivo IFC durante el año 2021, debiendo constar su ingreso de solicitud a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Para dar curso a lo anterior, el promotor deberá solicitarlo explícitamente e indicar la fecha del ingreso de la solicitud del permiso junto a su respectivo respaldo.
Una vez obtenido dicho informe, el mismo deberá ser remitido a la Comisión para complementar los antecedentes o dar cumplimiento al hito según se establezca en la respectiva resolución exenta que declara el proyecto en construcción".*

¹ Oficio Ordinario N° 828, Comisión Nacional de Energía, de 18 de noviembre de 2021, que establece consideraciones extraordinarias para el proceso de declaración en construcción; Oficio Ordinario N° 041, de la Comisión Nacional de Energía, de 13 de enero de 2022, que establece consideraciones extraordinarias para el proceso de declaración en construcción de proyectos de generación y deja sin efecto Oficio CNE N° 828 de 2021; Oficio Ordinario N° 235, de la Comisión Nacional de Energía, de 31 de marzo de 2022, que rectifica y aclara Oficio CNE N° 041 de 2022 y deja sin efecto Oficio CNE N° 137 de 2022; Oficio Ordinario N° 107, de la Comisión Nacional de Energía, de 9 de febrero de 2023, que Establece plazo para el cumplimiento de condiciones asociadas a la declaración en construcción de proyectos bajo criterio de flexibilidad; Oficio Ordinario N° 494, de la Comisión Nacional de Energía, de 28 de julio de 2023, que informa nuevo plazo para el cumplimiento de condiciones asociadas a la declaración en construcción de proyectos bajo criterio de flexibilidad.

Por su parte, el Ord. CNE N° 041/2022 de 13 de enero de 2022, estableció ciertos requisitos en cuanto a las fechas de presentación de la solicitud de declaración en construcción y de respuesta a las observaciones enviadas por la Comisión, indicando que las consideraciones extraordinarias o flexibilidades antes indicadas, comenzarían a ser aplicadas desde la publicación en el sitio web de la Comisión del referido Ord. CNE N° 041/2022 y hasta el día 31 de marzo del 2022, en los siguientes términos:

"[L]as consideraciones extraordinarias o flexibilidades antes indicadas comenzarán a ser aplicadas a partir de la publicación en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía del presente oficio hasta el día 31 de marzo del 2022. Asimismo, las solicitudes de declaración en construcción presentadas antes del plazo definido en el artículo 2° transitorio del Decreto Supremo N°88 podrán optar al régimen de precio estabilizado por precio de nudo de corto plazo si:

- i. El proyecto entregó respuesta a las observaciones enviadas por parte de la Comisión, al día 7 de abril, inclusive, y dieron respuesta de manera satisfactoria.*
- ii. El proyecto presentó su solicitud de declaración en construcción hasta el día 8 de abril, inclusive, y no presenta observaciones por parte de la Comisión".*

Sin perjuicio de lo anterior, el citado Ord. CNE N° 041/2022, de 13 de enero de 2022, fue rectificado y aclarado mediante el Oficio Ordinario N° 235, de 31 de marzo de 2022 ("Ord. CNE N° 235/2022"), con ocasión de la dictación del Decreto Supremo N° 27 del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 29 de marzo de 2022, el cual introdujo modificaciones al artículo segundo transitorio del Reglamento de MGPE, en el sentido de ampliar de dieciocho a veinticuatro meses -contados desde la publicación en el Diario Oficial del Reglamento de MGPE-, el plazo para que los PMGD obtuvieran su declaración en construcción, para efectos de acogerse al régimen de precio estabilizado, de modo que, antes de la modificación introducida por el Decreto Supremo N° 27 de 2022 del Ministerio de Energía, tal término vencía el 8 de abril de 2022, y luego de tal cambio normativo, dicho plazo vencía el 8 de octubre de 2022².

De tal manera, el Ord. CNE N° 235/2022, reemplazó el párrafo transcrito precedentemente por el siguiente:

"Por último, cabe señalar que: i. Sólo podrán optar al régimen de valorización de su energía inyectada al precio de nudo de corto plazo de energía de la barra correspondiente aquellos proyectos que hayan ingresado una solicitud de declaración en construcción a más tardar al décimo octavo mes contado desde la fecha de publicación del Decreto Supremo N° 88 en el Diario Oficial y que hayan obtenido la declaración antes referida al vigésimo cuarto mes contado desde la misma fecha. En caso que la solicitud de declaración en construcción sea rechazada por la Comisión Nacional de Energía, se entenderá que no se cumple con el presente requisito.

ii. Las consideraciones extraordinarias, se mantendrán vigentes hasta el día 08 de abril de 2022.

iii. Las solicitudes de declaración en construcción de proyectos que estén optando a valorizar sus inyecciones a precio de nudo que se reciban, serán revisadas por la Comisión por su orden de ingreso, según la fecha y hora de su presentación a través de la Plataforma Digital de Declaración en Construcción, y resueltas de acuerdo a la completitud y entrega de los documentos establecidos para ello, pudiendo la Comisión rechazar la solicitud presentada si no se cuenta con la totalidad de los documentos o no se subsanen las observaciones que este servicio pueda tener al respecto."

De esta manera, en cuanto a la fecha de obtención de la declaración en construcción, para efectos de poder acceder al régimen de precio nudo de corto plazo, el Ord. CNE N° 235/2022, en concordancia con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Reglamento de MGPE, dispuso que tal declaración en construcción debía ser obtenida al vigésimo cuarto mes contado desde la fecha de publicación del Reglamento de MGPE en el Diario Oficial, plazo que se cumplía el 8 de octubre de 2022.

Por su parte, la vigencia de las consideraciones extraordinarias o criterios de flexibilidad para el proceso de declaración en construcción, fue también modificada por el Ord. CNE N° 235/2022, en

² Por efectos de lo dispuesto en el artículo 25° inciso 3° de la Ley N° 19.880, dado que el día 8 de octubre de 2022 era inhábil, el plazo se entendió prorrogado hasta el 11 de octubre de 2022, que era el primer día hábil siguiente.

el cual se señaló expresamente que “[l]as consideraciones extraordinarias, se mantendrán vigentes hasta el día 08 de abril de 2022”, entendiéndose por esta Comisión que, hasta tal fecha fue posible ingresar solicitudes en orden a acogerse a los criterios de flexibilidad señalados, las que, serían revisadas por la Comisión acorde a la fecha y hora de su presentación, y resueltas acorde a los antecedentes aportados, pudiendo haberse declarado en construcción un proyecto bajo criterio de flexibilidad hasta el 11 de octubre de 2022, para efectos de acogerse al régimen de precio nudo de corto plazo, acorde a lo establecido en el artículo segundo transitorio literal b) del Reglamento de MGPE, modificado por el Decreto Supremo N° 27 de 2022 del Ministerio de Energía.

Posteriormente, y únicamente respecto de los proyectos que ya habían sido declarados en construcción bajo criterio de flexibilidad, se otorgó un plazo adicional para la entrega de los IFC faltantes, el cual fue extendido hasta el 31 de mayo de 2023, mediante el Oficio Ordinario N° 107, de 9 de febrero de 2023, y posteriormente hasta el 31 de agosto de 2023, por el Oficio Ordinario N° 494, de 28 de julio de 2023, ambos de la Comisión. Así, como se desprende claramente de dichos actos administrativos, los criterios de flexibilidad tuvieron un carácter absolutamente excepcional, acotado en el tiempo y restringido a circunstancias extraordinarias debidamente justificadas. Su aplicación respondió al principio de eficiencia administrativa y a la necesidad de no paralizar el desarrollo de proyectos energéticos en un escenario crítico, sin que ello implicara en modo alguno una modificación permanente del marco normativo vigente.

II. Análisis del caso particular del Proyecto

En este caso particular, mediante la carta individualizada en el ANT. (4), su representada solicita a esta Comisión “emitir una observación, aclaración o modificación, lo que se estime conveniente, en orden de aclarar para entendimiento de terceros que la declaración en construcción, a pesar de haber sido emitida con fecha 29 de febrero de 2024 por medio de la RE75, esta sí cumple con los requisitos del oficio de la misma CNE ORD. N° 041/2022 sobre consideraciones extraordinarias para el proceso de Declaración en Construcción, y así sí debiese ser acogido para el régimen de precio estabilizado por precio de nudo de corto plazo”.

Para efectos de dar respuesta a lo solicitado, corresponde analizar si, al **8 de octubre de 2022** - fecha límite en que los proyectos podían declararse en construcción bajo criterio de flexibilidad- el Proyecto, cumplía con los requisitos del Ord. CNE. N° 041/2022 sobre consideraciones extraordinarias para el proceso de Declaración en Construcción en lo relativo a la presentación del IFC, para efectos de lo cual, se estableció en dicho oficio, la necesidad de acreditar “haber iniciado la tramitación del respectivo IFC durante el año 2021, debiendo constar su ingreso de solicitud a más tardar el 31 de diciembre de 2021”.

Revisado el historial de tramitación del Proyecto, cuya solicitud de declaración en construcción fue ingresada el 11 de marzo de 2022, y luego de varias iteraciones en las que la Comisión efectuó observaciones a los antecedentes presentados siendo aquellas respondidas por el Titular, se tiene que, al 8 de octubre de 2022, la única observación que subsistía por parte de la Comisión, era aquella referida a la entrega de los IFC, toda vez que a esa fecha, el Proyecto contaba con IFC rechazado por Resolución Exenta N° 267, de 13 de junio 2022, por el SAG de la Región del Maule, así como con recurso de reposición rechazado por la misma autoridad, mediante Resolución Exenta N° 349, de 26 de julio de 2022, sin perjuicio de contar con recurso jerárquico en trámite.

En tal oportunidad, en observación emitida con fecha 7 de octubre de 2022, se estimó por la Comisión que la existencia de un recurso jerárquico en trámite, no era suficiente para dar por cumplido el requisito establecido en el literal g) del artículo 69° del Reglamento de MGPE, y por ende el Proyecto no fue declarado en construcción sino hasta el 29 de febrero de 2024, una vez presentados los respectivos IFC favorables.

No obstante lo anterior, a propósito de lo señalado en la Carta del ANT. (4) en orden a que el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 267, de 13 de junio 2022, del SAG Regional del Maule, fue finalmente acogido por el Director Nacional del SAG, mediante Resolución Exenta N° 5477, de 29 de agosto 2023, corresponde analizar si dicho acto puede tener efecto retroactivo, y en qué se traduciría dicho efecto para este caso concreto.

Al respecto, los efectos de los actos administrativos en el tiempo, se encuentran regulados por los artículos 51° y 52° de la Ley N° 19.880, disponiendo el primero de aquellos que los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de

contenido individual o general, mientras que el citado artículo 52° consagra el principio de irretroactividad de los actos administrativos³, disponiendo que aquellos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.

Sobre esta materia, la doctrina ha abordado la retroactividad de los actos administrativos, a propósito de los efectos de la invalidación administrativa, reconociendo que por regla general esta opera con efecto retroactivo: "[e]n cuanto a los efectos temporales del acto administrativo invalidatorio, cabe señalar que la regla general profesa que la invalidación opera con efectos retroactivos, lo cual deriva de la naturaleza declarativa de dicho mecanismo extintivo de carácter anulatorio. De este modo, las consecuencias se remontan a los efectos producidos antes de la emisión del acto invalidatorio, por cuanto, si se trata de un acto viciado, esta extinción debe ser total, debiendo desaparecer todas las consecuencias contaminadas con el vicio congénito del acto administrativo"⁴.

Por su parte, la retroactividad excepcional de los actos administrativos, consagrada en el artículo 52° de la Ley N° 19.880, ha sido reconocida por la Contraloría General de la República como un límite a la potestad invalidatoria, al señalar que: "[d]e conformidad con lo previsto por el artículo 52 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. En relación con el alcance de dicha norma respecto de la invalidación (...) como tal, se rige por el precepto citado precedentemente, el que pasa a constituir un límite a la potestad invalidatoria de la Administración, en cuanto esta no puede afectar desfavorablemente al interesado, de modo que, en la medida que signifique una privación o una merma para éste, el acto invalidatorio no puede producir el efecto retroactivo que le es propio"⁵.

Asimismo, la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema ha ordenado aplicar la excepción de retroactividad del artículo 52° de la Ley N° 19.880, reconociendo que, si bien la regla general es la irretroactividad de los actos administrativos, procede la retroactividad cuando éstos generan consecuencias favorables para los interesados y no afectan derechos de terceros.

Por ejemplo, la Excm. Corte Suprema, conociendo un recurso de protección interpuesto por una trabajadora contratada a honorarios, a quien se le había negado la aplicación del Dictamen N° 14.498 de la Contraloría General de la República, que extendía el fuero maternal a dicho tipo de contratación, estimó que, conforme al artículo 52° de la Ley N° 19.880, dicho dictamen debía aplicarse retroactivamente por generar consecuencias favorables sin afectar derechos de terceros, calificando como ilegal y arbitraria la negativa de la recurrida y acogiendo la acción deducida, indicando que debe primar la garantía constitucional de la igualdad ante la ley y la buena fe administrativa.

*"Décimo quinto: Que, en este entendimiento, el Dictamen N° 14.498 del Contralor General es un acto administrativo, de modo que debe recibir aplicación la norma establecida en el artículo 52 de la Ley N° 19.880. De esta manera, **si bien la regla general es la irretroactividad de los actos administrativos, la excepción se verifica cuando los actos produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros**, cuyo es el caso, pues es indudable que el discernimiento plasmado en el Dictamen N° 14.498 produce consecuencias favorables para la recurrente, desde el momento que extiende la institución del fuero maternal a las servidoras contratadas a honorarios, bajo los términos descritos en dicho acto. (...)*

Vigésimo primero: Que, por consiguiente, al negarse a la recurrente la posibilidad de aplicar el Dictamen N° 14.498, el que sin duda la beneficia, aduciendo la recurrida una supuesta imposibilidad de aplicación retroactiva por razones de certeza jurídica y de consolidación de situaciones jurídicas al alero de otra jurisprudencia administrativa, ha incurrido en un acto ilegal, al desatender el texto expreso del artículo 52 de la Ley N° 19.880 que permite la aplicación retroactiva de los actos administrativos cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. Además, la negativa de la recurrida es arbitraria,

³ "Artículo 52°. Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros."

⁴ Flores Rivas, Juan Carlos, "Revisión del acto administrativo: Recursos administrativos, invalidación, revocación, caducidad y decaimiento" (2023), DER Ediciones, pág. 69.

⁵ Dictámenes N° 12.391 de 2008 y N° 24.445 de 2009.

*toda vez que la no renovación del contrato a honorarios de la actora tuvo lugar el 25 de marzo de 2019, es decir, unos pocos días antes de la emisión del Dictamen N° 14.498 de 30 de mayo del mismo año, por lo que la afectación de la seguridad jurídica, en este caso concreto, resulta a lo menos cuestionable, debiendo primar la **garantía constitucional de la igualdad ante la ley y la buena fe administrativa**. De esta manera, la recurrida ha afectado la señalada garantía, por cuanto ha dado a la recurrente un trato diferenciado en relación con aquellas servidoras que sí resultaron beneficiadas con la aplicación del Dictamen N° 14.498, por el sólo hecho que su situación jurídica se consolidó bajo el nuevo discernimiento plasmado por el Contralor General de la República, cuestión que determina el acogimiento del recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo.”⁶ (énfasis agregado)*

Asimismo, en otro fallo, la Excm. Corte Suprema reafirmó que los dictámenes de la Contraloría General constituyen actos administrativos sujetos al régimen de la Ley N° 19.880, por lo que también procede aplicarles la excepción de retroactividad prevista en su artículo 52°. En el caso concreto, se reconoció que los Oficios N° 4160 y N° 4168 y el Dictamen N° 20.921, que extendieron el fuero maternal a funcionarias contratadas como reemplazo, debían aplicarse retroactivamente por producir consecuencias favorables sin afectar derechos de terceros.

“Décimo cuarto: Que, en relación con la retroactividad de los actos administrativos, el artículo 52 de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos dispone que: “Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros”. Por su parte, la Ley N° 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República no contiene normas que se refieran a la aplicación retroactiva de los dictámenes de la entidad de control.

Cabe recordar que el artículo 2 de la Ley N° 19.880 señala de manera expresa que su ámbito de aplicación considera a la Contraloría General de la República, de modo que el concepto de “acto administrativo” a que se refiere su artículo 3 resulta también aplicable al órgano de control y, por consiguiente, a sus dictámenes.

*Décimo quinto: Que, en este entendimiento, los Oficios N°s. 4160 y 4168 y el Dictamen N° 20.921 del Contralor General son actos administrativos, de modo que **debe recibir aplicación la norma establecida en el artículo 52 de la Ley N° 19.880**. De esta manera, **si bien la regla general es la irretroactividad de los actos administrativos, la excepción se verifica cuando los actos “produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros”, cuyo es el caso, pues es indudable que el discernimiento plasmado en el Dictamen N° 20.921 produce consecuencias favorables para las recurrentes, desde el momento que extiende la institución del fuero maternal a las funcionarias contratadas en calidad de reemplazo, esto es, para desempeñar funciones transitorias y mientras dure la ausencia del titular”⁷. (énfasis agregado)***

Finalmente, en un pronunciamiento referido a sanciones disciplinarias en el Ejército, la Excm. Corte Suprema sostuvo que debía aplicarse retroactivamente la normativa más favorable al sancionado, en virtud del artículo 52° de la Ley N° 19.880. Ello porque la nueva tipificación de la infracción, establecida en una resolución posterior, implicaba una sanción menos gravosa (anotación de demérito) en lugar de la baja de la institución. La negativa de la autoridad a aplicar la regulación más favorable fue considerada arbitraria, por generar un trato desigual frente a quienes sí resultaron beneficiados con la nueva normativa.

“Quinto: Que, como se ha dicho por esta Corte (Rol N°41.254 - 2019), el problema de la retroactividad de los actos administrativos ha sido zanjado a través del llamado efecto retroactivo, el que se define, en oposición al efecto ad praeterita, como una facultad del legislador, quien por su voluntad decide incorporar situaciones ocurridas con anterioridad a la dictación de la ley.

En ese caso, la voluntad de legislador se plasma a través de lo impuesto por los artículos 51 y 52 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos citados

⁶ Sentencia Corte Suprema, Rol N° 11.524-2021.

⁷ Sentencia Corte Suprema, Rol N° 41.254-2019.

en el considerando precedente, estableciendo que si bien la regla general es la irretroactividad de los actos administrativos, la excepción se verifica cuando los actos produzcan consecuencias favorables para los interesados, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros; supuestos de hecho que, en la presente causa, se han verificado.

Sexto: Que, en efecto, de acuerdo con la Circular de Comando CJE AUGÉ (R) N°1500/541 de mayo de 2018 se dispone la baja de funcionarios que hayan incurrido en la conducta sancionada, en concordancia con los parámetros y criterios dados por el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, y que, de acuerdo con la nueva tipificación de las sanciones, ordenada a través de Resolución de Comando Exenta CJE DPE I/1C (R) N° 6030/12598/1283, de fecha 10 agosto de 2020, la infracción cometida por el actor deberá sancionarse estampando una anotación de demérito con puntaje negativo en el concepto Cumplimiento del deber, iniciando con -1,50, sanción que a todas luces es más favorable para él, ya que no implica, per se, su expulsión o salida de la institución.

*Séptimo: Que, de esta forma, se evidencia que **la institución recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, ya que encontrándose el actor dentro de los supuestos de hecho de lo estipulado en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 19.880, no se le ha sancionado conforme la normativa más nueva que le es favorable**, generándose una diferencia arbitraria respecto de aquellos a quienes se les ha aplicado correctamente la normativa sobre la materia, por lo que será acogida la acción deducida en los términos que se consignaran en lo resolutivo.*⁸ (énfasis agregado)

De esta manera, la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema ha consolidado una interpretación uniforme del artículo 52° de la Ley N° 19.880, en el sentido de que la regla general de la irretroactividad de los actos administrativos admite como excepción aquellos supuestos en que la aplicación retroactiva produce consecuencias favorables para los interesados, siempre que no se vulneren derechos de terceros. Esta línea jurisprudencial —reconocida tanto respecto de dictámenes de la Contraloría General de la República como de resoluciones sancionatorias del Ejército— permite concluir que la retroactividad no constituye una excepción meramente teórica, sino una herramienta efectiva para resguardar la igualdad ante la ley y la buena fe administrativa.

Sobre esa base, corresponde analizar si la Resolución Exenta N° 5477, de 29 de agosto de 2023 del Director Nacional del SAG (“Res. Ex. N° 5477/2023”), la cual acogió el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Exenta N° 267, de 13 de junio de 2022 del SAG Regional del Maule, puede producir efectos retroactivos y en qué medida ello incidiría en la situación particular que se examina, teniendo en cuenta que la citada Res. Ex. N° 5477/2023, dispuso acoger el recurso jerárquico, y en su Resuelto N° 2 “2. **SE ORDENA** al Director (a) Regional de la Región de Ñuble, realizar los actos administrativos que en derecho correspondan, con el objeto de informar “favorable” el proyecto descrito en el recurso que se acoge”.

Al respecto, en primer lugar, corresponde señalar que **la Res. Ex. N° 5477/2023 no tiene un efecto invalidatorio, que haga procedente la aplicación de retroactividad general que la doctrina ha reconocido como efecto de la invalidación administrativa**. Lo anterior toda vez que no se advierte en este caso la existencia de un acto administrativo ilegal o viciado por parte del SAG Regional. Por el contrario, la Res. Ex. N° 5477/2023, de la Dirección Nacional del SAG, desestimó lo resuelto en la Resolución Exenta N° 267/2022 sobre la base de una distinta ponderación de antecedentes técnicos incorporados con posterioridad, señalando expresamente: “11. *Que, de los elementos evaluados, es posible considerar que se han agregado antecedentes técnicos, explicitados en el considerando 8 de la presente resolución exenta, que hacen ponderar los hechos de forma distinta a lo observado por la Dirección Regional, Región de Ñuble, por lo cual esta Dirección Nacional desestimaré lo resuelto mediante Resolución Exenta N°267 de 2022, la cual resolvió informar ‘Desfavorable’ la solicitud de factibilidad de construcción ajenas a la agricultura.*” Ello evidencia que no se trató de la corrección de un vicio de legalidad, sino de un pronunciamiento fundado en nuevos elementos de juicio.

Sin perjuicio de lo anterior, **esta Comisión estima que la Res. Ex. N° 5477/2023 tiene como efecto la retroactividad excepcional establecida en el artículo 52° de la Ley N° 19.880**, por cuanto se trata de un acto administrativo que incorpora una nueva ponderación de

⁸ Sentencia Corte Suprema, Rol N° 19.237-2020.

antecedentes técnicos en beneficio directo del interesado, generando consecuencias favorables para éste y sin que se advierta la existencia de derechos de terceros que pudieren verse afectados, cumpliéndose de este modo las exigencias que la citada disposición contempla para su procedencia.

En efecto, en este caso, la Res. Ex. N° 5477/2023 resulta favorable para el Titular, toda vez que revierte lo resuelto previamente por la Resolución Exenta N° 267/2022 del SAG Regional del Maule, que había emitido un pronunciamiento “desfavorable” respecto del IFC del Proyecto. En cambio, la resolución de la Dirección Nacional acoge el recurso jerárquico y ordena expresamente a la autoridad regional emitir un informe “favorable” para el Proyecto. Ello configura claramente una consecuencia favorable en los términos del artículo 52° de la Ley N° 19.880 desde el punto de vista del Titular del Proyecto, dado que el IFC opera como autorización necesaria que debe obtenerse de manera previa a la construcción del mismo. Asimismo, no se advierte la existencia de derechos de terceros que se vean perjudicados con este cambio de criterio administrativo, lo que habilita la aplicación de la excepción de retroactividad contemplada en la ley.

Ahora, en cuanto a cómo opera tal retroactividad para este caso concreto, esta Comisión entiende que, al ordenarse en la Res. Ex. N° 5477/2023 al SAG Regional realizar los actos administrativos que en derecho correspondan, con el objeto de informar “favorable” el IFC del Proyecto, dicho pronunciamiento tiene efectos hacia el pasado, de forma que, desde el 13 de junio de 2022 -fecha de la Resolución Exenta N° 267/2022 impugnada mediante el recurso jerárquico-, debe considerarse que el IFC del Proyecto se encontraba en tramitación ante el SAG y pendiente de resolución favorable.

En consecuencia, **por aplicación excepcional del efecto retroactivo reconocido por el artículo 52° de la Ley N° 19.880 a la Res. Ex. N° 5477/2023, se estima que, al 8 de octubre de 2022 —fecha límite establecida para acogerse al precio nudo de corto plazo— el Proyecto se encontraba con un IFC en trámite, el cual había sido ingresado a tramitación con fecha 17 de noviembre de 2021⁹, satisfaciendo así el estatus requerido por el Ord. CNE N° 041/2022 para efectos de declarar un proyecto en construcción bajo la aplicación flexible del literal g) del artículo 69° del Reglamento de MGPE.**

En virtud de lo anterior, **esta Comisión estima que el Proyecto cumple con lo establecido en el Ord. CNE N° 041/2022, para efectos de haber sido declarado en construcción bajo criterio de flexibilidad, dentro del plazo previsto en el artículo 2° transitorio, literal b), del Reglamento de MGPE.**

Así, bajo este supuesto, el Proyecto cumpliría con lo establecido en el artículo 2° transitorio, literal b), del Reglamento de MGPE, para efectos de acogerse al régimen de precio estabilizado por precio de nudo de corto plazo, siempre que comunique al Coordinador Eléctrico Nacional de esta opción al menos un mes antes de su entrada en operación, toda vez que obtuvo el ICC y presentó la solicitud de Declaración en Construcción dentro de los plazos establecidos en dicha disposición normativa, y en lo que respecta a la fecha de obtención de la declaración en construcción, esta Comisión estima que el Proyecto cumplía con lo establecido en el Ord. CNE N° 041/2022, para efectos de haber sido declarado en construcción bajo criterio de flexibilidad, dentro del plazo previsto en el artículo 2° transitorio, literal b), del Reglamento de MGPE.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

MFH/DZO/PMP/AAA/LAN/MCL

Distribución:

- Sociedad Energías Renovables El Álamo SpA
- Departamento Jurídico CNE
- Departamento Eléctrico CNE
- Oficina de Partes CNE

Expediente: N° 2.066/2025

⁹ Según consta en la Resolución Exenta N° 267 de 13 de junio 2022 emitida por el SAG de la Región del Maule, acompañada a la carta del ANT. (4)